



REPÚBLICA DE COLOMBIA
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE MEDELLIN
SALA QUINTA DE DECISION LABORAL

Proceso	Ordinario Laboral
Radicación	05360-31-05-001-2021-00188-02
Demandante	Liliana María Muñoz Díez
Demandado	Colpensiones y Porvenir S.A.
Asunto	Apelación auto aprueba liquidación de costas
Procedencia	Juzgado Primero Laboral del Circuito de Itagüí
Magistrada ponente	Sandra María Rojas Manrique
Tema	Tarifas de agencias en derecho

Medellín, julio veintiocho (28) de dos mil veintidós (2022)

En la fecha, la Sala Quinta de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, integrada por los magistrados JULIO RAFAEL TORDECILLA PAYARES, VICTOR HUGO ORJUELA GUERRERO y SANDRA MARIA ROJAS MANRIQUE, como Magistrada sustanciadora, decide el recurso de **Apelación** interpuesto por el señor apoderado de la demandante, en contra del auto proferido por el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Itagüí, el 8 de abril del 2022, por medio del cual se aprobaron las costas procesales, en el trámite del proceso ordinario laboral de la referencia.

1.- ANTECEDENTES

La señora LILIANA MARÍA MUÑOZ DÍEZ, instauró demanda ordinaria laboral en contra de COLPENSIONES y PORVENIR S.A., pretendiendo se declare que Porvenir S.A., la engañó con el fin de trasladarla y mantenerla afiliada en ese régimen pensional, en consecuencia, se declare la ineficacia del traslado y se ordene la inmersión en el Régimen de Prima Media, declarándose que Colpensiones debe aceptar el traslado, conforme a ello, se condene a Porvenir S.A. a trasladar a Colpensiones el 100% de las cotizaciones, bonos etc., con los rendimientos, debidamente indexados, pagando de su propio patrimonio los dineros que por concepto del artículo 20 de la Ley 100 de 1993 modificado por el artículo 7 de la Ley 797 de 2003 fueron extraídos de las cotizaciones, condenándose a Colpensiones a recibir todas las cotizaciones. De manera subsidiaria, solicita se ordene a Porvenir S.A., a título de indemnización de perjuicios materiales, aplique las condiciones pensionales del Régimen de Prima Media.

El Juzgado Primero Laboral del Circuito de Itagüí, mediante sentencia proferida el 29 de noviembre del 2021, declaró la ineficacia del traslado efectuado por la demandante, ordenando a Porvenir S.A., efectuar el traslado inmediato de todos los valores que hubiere recibido con motivo de su afiliación, como cotizaciones, bonos pensionales, los rendimientos que se hubieren causado, sumas adicionales de la aseguradora y cuotas de administración indexadas, incluyendo lo descontado para el Fondo de Garantía de Pensión Mínima a Colpensiones, ordenando a ésta última reactivar la afiliación de la demandante, recibir las sumas indicadas, continuar como la administradora de pensiones de la accionante y finalmente, condenó en costas a Porvenir S.A.

Esta Sala de Decisión Laboral, mediante sentencia proferida el 28 de febrero del 2022, confirmó la providencia de primera instancia, fijando agencias en segunda instancia, a cargo de Porvenir S.A., en la suma de \$908.526.

2.- AUTO APELADO

En providencia del 8 de abril del 2022, el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Itagüí, liquidó y aprobó las costas procesales, que incluyen agencias en derecho a cargo de Porvenir S.A., en primera instancia, en cuantía de \$908.526.

3.- APELACION DEMANDANTE

El apoderado de la demandante, interpuso recurso de apelación contra el auto por el cual se aprueba la liquidación de las costas procesales, indicando que en este caso se debe aplicar el Acuerdo PSAA16-10554 del 2016, siendo claro que en la sentencia se declaró la ineficacia del traslado, siendo ésta una obligación de hacer, además se ordenaron los traslados de algunos conceptos, lo que se traduce en una obligación de dar, considerando que la a quo no respetó los topes para liquidar las costas y agencias en derecho en este tipo de procesos, las que se debieron fijar en la suma de \$9.085.260 y el 7.5% del valor de la condena, por la obligación de dar.

Adujo que las sumas fijadas en las instancias no resultan acordes a la naturaleza del proceso, duración y actividad del mismo, sin perderse de vista que a pesar de los obstáculos que presentaron las AFP, buscando que se negaran las pretensiones, fueron vencidas gracias a las estrategias empleadas por el mismo.

El Juzgado de Conocimiento mediante auto del 26 de abril del 2022, concedió el recurso de apelación.

4.- ALEGATOS EN SEGUNDA INSTANCIA

Dentro de la oportunidad procesal, ninguno de las partes efectuó pronunciamiento.

5.- CONSIDERACIONES

La competencia de esta Corporación está dada por los puntos que son objeto de apelación de conformidad con el artículo 57 de la ley 2 de 1984, y los artículos 65 y 66 del CPL y de la SS, modificados por los artículos 29 y 35 de la ley 712 de 2001.

5.1.- Problema Jurídico

Debe determinar la Sala:

¿Si el auto proferido el 8 de abril del 2022, por el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Itagüí, mediante el cual se aprueban las costas procesales liquidadas, incluyendo como agencias en derecho en primera instancia la suma de \$908.526 a cargo de Porvenir S.A., se ajusta a los parámetros normativos o si, por el contrario, la tarifa de agencias en derecho, debe ser incrementada, como lo solicita el apoderado recurrente?

5.2.- Tesis

El problema jurídico se resuelve bajo la tesis según la cual, las agencias en derecho fijadas por la a quo, no resultan equitativas, razonables y proporcionales, respecto de la naturaleza, calidad y la duración de la gestión, de acuerdo con los derroteros establecidos por el Acuerdo PSAA16-10554 del 5 de agosto de 2016, por lo tanto, el auto recurrido debe ser MODIFICADO.

5.3.- Premisas Normativas

En lo atinente a la fijación de agencias en derecho, el numeral 4° del artículo 366 del Código General del Proceso, preceptúa:

“4. Para la fijación de agencias en derecho deberán aplicarse las tarifas que establezca el Consejo Superior de la Judicatura. Si aquellas establecen solamente un mínimo, o este y un máximo, el juez tendrá en cuenta, además, la naturaleza, calidad y duración de la gestión realizada por el apoderado o la parte que litigó personalmente, la cuantía del proceso y otras circunstancias especiales, sin que pueda exceder el máximo de dichas tarifas.”

Igualmente, el Consejo Superior de la Judicatura emitió el Acuerdo PSAA16-10554 del 5 de agosto de 2016, que en el artículo 5, regula las agencias en derecho a favor del trabajador, afiliado o beneficiario, en los procesos ordinarios laborales de primera instancia, así:

“a. Por la cuantía. Cuando en la demanda se formulen pretensiones de contenido pecuniario:

(i) De menor cuantía, entre el 4% y el 10% de lo pedido

(ii) De mayor cuantía, entre el 3% y el 7.5% de lo pedido.

b. Por la naturaleza del asunto. En aquellos asuntos que carezcan de cuantía o de pretensiones pecuniarias, entre 1 y 10 S.M.M.L.V.”.

Precisa también el artículo 2° del acuerdo referenciado que al momento de fijar las agencias en derecho, se tendrán en cuenta los siguientes criterios:

“Para la fijación de agencias en derecho el funcionario judicial tendrá en cuenta, dentro del rango de las tarifas mínimas y máximas establecidas por este acuerdo, la naturaleza, la calidad y la duración de la gestión realizada por el apoderado o la parte que litigó personalmente, la cuantía del proceso y demás circunstancias especiales directamente relacionadas con dicha actividad,

que permitan valorar la labor jurídica desarrollada, sin que en ningún caso se puedan desconocer los referidos límites”

Por su parte, el artículo 5° numeral 1° estipula como tarifa para tasar las agencias en derecho de proceso declarativos de primera instancia, lo siguiente:”

5.4.- Caso Concreto

Las órdenes impartidas en las sentencias que ponen fin a las instancias, respecto a Porvenir S.A., corresponden, a obligaciones de hacer, que no resultan cuantificables pecuniariamente, por lo tanto, la tarifa de agencias en derecho, a la luz de los parámetros del Acuerdo PSAA16-10554 de 2016, oscila entre “entre 1 y 10 S.M.M.L.V”.

Ahora no resulta acertada la tesis del demandante en cuanto a que el fallo contiene una obligación de dar, cuya cuantía pueda ser determinada para la imposición de agencias en derecho, en tanto la orden se contrae al traslado de los dineros de la cuenta de ahorro individual, incluyendo las sumas que fueron descontadas por concepto de comisiones de administración, seguros previsionales y aportes al Fondo de Garantía Mínima, la cual comporta el cambio de administradora pensional y no una obligación dineraria en favor de la de la demandante.

Ahora bien, la norma reglamentaria es clara en establecer una tarifa mínima de un (1) salario mínimo mensual vigente y una máxima de diez (10) salarios mínimos mensuales vigentes, por lo tanto, debe darse aplicación al numeral 4 del artículo 366 del Código General del Proceso que dispone: *“Para la fijación de agencias en derecho deberán aplicarse las tarifas que establezca el Consejo Superior de la Judicatura. Si aquellas establecen solamente un mínimo, o este y un máximo, el juez tendrá en cuenta, además, la naturaleza, calidad y duración de la gestión realizada por el apoderado*

o la parte que litigó personalmente, la cuantía del proceso y otras circunstancias especiales, sin que pueda exceder el máximo de dichas tarifas.”

La a quo mediante el auto recurrido estableció las agencias en derecho en primera instancia en la suma de \$908.526, que equivalen a 1 salario mínimo legal mensual para el 2021, anualidad en que se profirió la decisión, quantum que está dentro de los parámetros normativos, pero que corresponde al límite inferior que consagra la norma y que a juicio de esta Sala de Decisión, no resulta ajustado, teniendo en cuenta los diversos factores que deben ser analizados, considerándose que pese a la baja complejidad del asunto, la cuantía establecida por la a quo, es exigua.

En torno a la aplicación a este caso de los criterios del artículo 2 del acuerdo citado, se debe precisar que tampoco puede fijarse los 10 salarios mínimos como lo pretende el alzadista, pues se trata de un proceso de bajísima complejidad, ya que versa sobre un tema que se encuentra resuelto en la jurisprudencia del máximo tribunal de la jurisdicción ordinaria laboral, que no está sometido a extensos debates probatorios, beneficiándose la parte demandante de la inversión de la carga de la prueba, aunado a que el trámite de la primera instancia tuvo una duración de tan solo 5 meses y 4 días, contados desde la radicación de la demanda, 25 de junio de 2021 a la fecha de la sentencia que puso fin a la instancia, 29 de noviembre del 2021, y no puede olvidarse que, aunque las agencias en derecho, buscan compensar a la parte vencedora en el juicio por los gastos de agenciamiento judicial en que debe incurrir para activar el aparato judicial, no están sujetas a las tarifas de honorarios profesionales adoptadas por los distintos Colegios de Abogados.

Por lo antes expuesto, considera esta Sala que las agencias en derecho fijadas en primera instancia, deben ser MODIFICADAS estableciendo las mismas en la suma de \$1.817.052, valor que corresponde a dos (2) salarios mínimos legales mensuales vigentes del año 2021, que se itera, fue el año en el que se profirió la decisión de fondo.

6.- DECISIÓN

En mérito de lo expuesto la Sala Quinta de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín:

RESUELVE

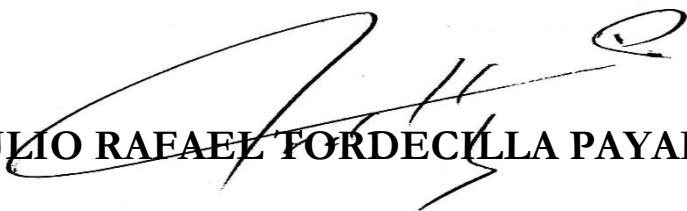
PRIMERO: Se **MODIFICA** el auto proferido por el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Itagüí, el 8 de abril del 2022, mediante el cual se aprueba la liquidación de las costas procesales, en el proceso ordinario instaurado por **LILIANA MARÍA MUÑOZ DÍEZ** en contra de **COLPENSIONES y PORVENIR S.A.**, en el sentido de APROBAR como agencias en derecho de primera instancia, a cargo de Porvenir S.A. y a favor de la demandante, la suma de UN MILLÓN OCHOCIENTOS DIECISIETE MIL CINCUENTA Y DOS PESOS (\$1.817.052).

SEGUNDO: Sin lugar a COSTAS en el trámite del recurso.

La anterior decisión se notifica a las partes por Estados, de conformidad con el artículo 41 del Código Procesal del Trabajo y la Seguridad Social.

Los Magistrados,


SANDRA MARIA ROJAS MANRIQUE


JULIO RAFAEL TORDECILLA PAYARES



VÍCTOR HUGO ORJUELA GUERRERO

**EL SUSCRITO SECRETARIO DEL TRIBUNAL
SUPERIOR DE MEDELLÍN – SALA LABORAL -
HACE CONSTAR**

Que la presente providencia se notificó por estados N
132 del 29 de julio de 2022

consultable aquí:

<https://www.ramajudicial.gov.co/web/tribunal-superior-de-medellin-sala-laboral/130>